

Protesta social universitaria en la Argentina actual. Transformaciones y tensiones en un contexto de puja democrática (2024-2025)

University Social Protest in Contemporary Argentina. Transformations and Tensions in a Context of Democratic Struggle (2024-2025)

Protesto Social Universitário na Argentina Contemporânea: Transformações e Tensões em um Contexto de Disputa Democrática (2024-2025)

María Virginia Quiroga*

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad Nacional de Río Cuarto. Río Cuarto, Argentina / Universidad Católica de Córdoba. Río Cuarto, Argentina
mquiroga@hum.unrc.edu.ar
ORCID: 0000-0002-1125-9283

Celia Cristina Basconzuelo

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad Nacional de Río Cuarto. Río Cuarto, Argentina
cbasconzuelo@hum.unrc.edu.ar
ORCID: 0000-0001-9005-7227

Iván Gustavo Baggini

Universidad Nacional de Río Cuarto. Río Cuarto, Argentina / Universidad Católica de Córdoba. Río Cuarto, Argentina
ibaggini@hum.unrc.edu.ar
ORCID: 0009-0009-7662-899X

Citar como: Quiroga, M. V. *et al.* (2026). Protesta social universitaria en la Argentina actual. Transformaciones y tensiones en un contexto de puja democrática (2024-2025). *Desde el Sur*, 18(4), e0088.

RESUMEN

El artículo analiza las protestas universitarias en el contexto argentino actual (2024-2025), consideradas como expresión de una democracia en disputa. Frente al avance de políticas de ajuste y concentración de poder, las marchas federales universitarias se configuraron como espacios de resistencia y proposición democrática sobre la base de construir alianzas intra e intersectoriales. Estas protestas lograron incidir en la agenda pública y legislativa

* Autora corresponsal: María Virginia Quiroga, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad Nacional de Río Cuarto. Río Cuarto, Argentina / Universidad Católica de Córdoba. Río Cuarto, Argentina. Correo: mquiroga@hum.unrc.edu.ar

mediante la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario, y reabrieron el debate sobre el sentido de los derechos y el destino de los fondos públicos. Siguiendo una metodología cualitativa, se diseñó una investigación documental a partir de un corpus constituido por comunicados oficiales del Estado, de organismos representativos de los universitarios y la prensa gráfica. El estudio sostiene que, aun en contextos adversos, la construcción de alianzas y redes colectivas puede revitalizar los procesos deliberativos y abrir horizontes democratizadores.

PALABRAS CLAVE

Protestas sociales, democracia, disputa, crisis, universidad

ABSTRACT

The article analyzes university protests in the current Argentine context (2024-2025), considering them as an expression of a democracy in dispute. In the face of advancing austerity policies and the concentration of power, the federal university marches emerged as spaces of resistance and democratic proposition, grounded in the construction of intra- and intersectoral alliances. These protests succeeded in influencing the public and legislative agenda through the approval of the Law on University Financing, reopening the debate on the meaning of rights and the allocation of public funds. Following a qualitative methodology, a documentary research design was developed based on a corpus made up of official State communications, documents from university stakeholders' representative bodies, and the printed press, all of which were examined according to certain guidelines of discourse analysis. The study argues that, even in adverse contexts, the construction of alliances and collective networks can reinvigorate deliberative processes and open democratizing horizon.

KEYWORDS

Social protests, democracy, dispute, crisis, university

RESUMO

O artigo analisa os protestos universitários no contexto

argentino atual (2024-2025), entendendo-os como expressão de uma democracia em disputa. Diante do avanço de políticas de ajuste e de concentração de poder, as marchas universitárias federais configuraram-se como espaços de resistência e de proposição democrática, baseados na construção de alianças intra e intersetoriais. Esses protestos conseguiram influenciar a agenda pública e legislativa por meio da aprovação da Lei de Financiamento Universitário, reabrindo o debate sobre o sentido dos direitos e o destino dos recursos públicos. A partir de uma metodologia qualitativa, foi delineada uma pesquisa documental baseada em um corpus composto por comunicados oficiais do Estado, documentos de organismos de representação de atores universitários e imprensa escrita, os quais foram analisados conforme alguns referenciais da análise do discurso. O estudo sustenta que, mesmo em contextos adversos, a construção de alianças e redes coletivas pode revitalizar os processos deliberativos e abrir horizontes democratizadores.

PALAVRAS-CHAVE

Protestos sociais, democracia, disputa, crise, universidade

Introducción

El contexto argentino actual parece evidenciar con nitidez la sintomatología de una democracia en crisis o, al menos, inmersa en fuertes disputas (Avritzer *et al.*, 2023; Rinesi, 2023; Carvalho *et al.*, 2024; Grimson, 2024; Wegelin, 2024). Entre estas manifestaciones cabe citar el creciente consenso social en torno a opciones autoritarias y reaccionarias, la fragmentación de las fuerzas progresistas y populares, y la agudización de problemáticas acuciantes como la pobreza y la desigualdad. Simultáneamente, se constata la sostenida reducción de la participación electoral y el acentuado deterioro de algunos aspectos formales que se han identificado, teórica y jurídicamente, como rasgos característicos del régimen democrático (división e independencia de los poderes del Estado, transparencia, rendición de cuentas, pluralismo político, reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales, entre otros).

Algunos indicadores resultan pertinentes para ilustrar este escenario. A lo largo de 2025, las tasas de pobreza e indigencia alcanzaron el 31,6

% y 6,9 % de la población¹, respectivamente; en tanto que el 10 % más rico concentra un tercio del ingreso y el 10 % más pobre apenas accede al 1,7 % (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2025). Por su parte, la concurrencia a las urnas registra una caída de entre cinco y diez puntos porcentuales cada diez años, desde el retorno a la democracia en 1983; ello marca una tendencia de participación electoral actual que oscila entre el 60 y el 65 % (Centro de Investigación para la Calidad Democrática, 2025). A su vez, se consolida la desconfianza hacia las instancias tradicionales de organización colectiva, ya que solo un 17 % de la población argentina manifiesta credibilidad en los sindicatos y solo el 18 % en los partidos políticos (Corporación Latinobarómetro, 2024).

Ahora bien, frente a las actuales políticas de ajuste fiscal y el creciente deterioro del financiamiento en áreas sensibles como salud y educación, se observa la intensificación del conflicto social. Es decir, numerosos actores colectivos reclaman por sus derechos lesionados, perdidos o aún no conquistados. Ha sido reiterada, por ejemplo, la movilización del sector de jubilados. Todos los miércoles se dieron cita frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires, con réplicas en distintos puntos del país, para exigir un incremento en los haberes y la restitución de la cobertura completa de medicamentos. Fue uno de los grupos que más sintió el ajuste en los últimos dos años.

También han adquirido resonancia las protestas protagonizadas por el sector sanitario, en especial los trabajadores del Hospital Pediátrico «Dr. Juan P. Garrahan» que denunciaban la falta de presupuesto para funcionamiento y los magros salarios. Esta lucha se articuló en torno a la sanción urgente y aplicación efectiva de la Ley de Emergencia Pediátrica, tratamiento que, como veremos luego, estuvo entrelazado al de la Ley de Financiamiento Universitario. Otro colectivo de protesta en relación con la salud estuvo conformado por el sector de discapacidad, que se manifestó de forma masiva y reiterada contra el Gobierno de Javier Milei en rechazo a los recortes en pensiones, el atraso en los aranceles de prestaciones y los vetos presidenciales a leyes de emergencia del sector.

De cara a la propuesta legislativa de reforma laboral (fines de 2025), las confederaciones generales de trabajadores combinaron huelgas y movilizaciones callejeras con una fuerte estrategia de judicialización y denuncias ante organismos internacionales. Al mismo tiempo, se han

1 No obstante, distintos especialistas han sostenido que, si la pobreza se midiera de manera multidimensional, la cifra se duplicaría hasta llegar al 67 %; ya que su medición no debería solo asentarse en la carencia monetaria, sino en la imposibilidad de acceder a otros múltiples derechos (UCA, 2025; *Página/12*, 10/12/2025).

incrementado las manifestaciones protagonizadas por las organizaciones sociales y de los Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP, por ejemplo) para visibilizar el sobreendeudamiento familiar y la falta de asistencia alimentaria en los comedores comunitarios.

En este panorama contestatario se inscribió el accionar del sector universitario. Particularmente, en los últimos dos años, los actores universitarios han recurrido a diversos repertorios de protesta, entre los que destacan paros, clases públicas y masivas movilizaciones. Se denuncia el fuerte retroceso en el presupuesto anual asignado en el marco de constantes ataques gubernamentales hacia la universidad pública, que cuestionan su función igualadora, su carácter inclusivo y su papel como instancia privilegiada de participación y deliberación colectiva.

Las marchas² federales constituyen un repertorio clave en el marco de las protestas universitarias, y se destacan por su carácter federal y masivo, basadas en una importante red de alianzas, tanto dentro como fuera del ámbito universitario. Sus impulsores y las acciones promovidas tuvieron como un primer resultado la aprobación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria, en agosto de 2025, que garantizaba una actualización de las partidas y preveía ajustes automáticos de salarios conforme la inflación. No obstante, el devenir de esta norma conlleva avances y retrocesos; su aplicación efectiva está en disputa legal y política en un derrotero incierto que aún sigue abierto.

A la luz del contexto presentado, este artículo se propone analizar las transformaciones y tensiones en torno a las tres marchas federales universitarias en Argentina, entre 2024 y 2025³. En particular, busca indagar de qué modo estas movilizaciones lograron potenciar su visibilidad pública y capacidad de convocatoria, así como (re)configurar alianzas y convergencias entre diversos actores. A su vez, se pregunta por la incidencia de estas protestas en la arena política institucional y, finalmente, si pueden interpretarse como parte de un conjunto de

2 El concepto de «marchas» se inspira en el estudio de Tartakowsky y Fillieule (2015), quienes las categorizan como manifestaciones callejeras y, en este sentido, como un repertorio altamente popular de la protesta social. Los autores identifican cuatro elementos básicos para caracterizarlas: la ocupación momentánea de espacios físicos abiertos; su dimensión expresiva, a través de la afirmación visible de un grupo y la explicitación de demandas; su carácter colectivo, dado que nuclean a múltiples participantes; y su naturaleza política, que se traduce en la formulación de reivindicaciones sociopolíticas, aun cuando estas no siempre se expresen de manera intencional (pp. 27-28).

3 Cabe señalar que nuestra propuesta se inscribe en el eje titulado «Movilizaciones y transformaciones políticas, sociales y culturales», en el marco de la convocatoria al dossier sobre «Transformaciones en las movilizaciones sociales contemporáneas: organizaciones (in)formales y sus impactos en la democracia» de la revista *Desde el Sur*.

prácticas colectivas orientadas a disputar, resignificar o revitalizar los repertorios participativos y los mecanismos de una democracia en crisis.

Por su parte, la hipótesis de trabajo sostiene que las marchas federales del sector universitario argentino en el lapso 2024-2025 ganaron capacidad de convocatoria y de incidencia política a partir de consolidar sus alianzas dentro y fuera del ámbito universitario con perspectiva multiescalar. Entre sus principales alcances destaca la ampliación de la discusión sobre los fondos y salarios universitarios, la modificación de los apoyos legislativos con los que contaba el gobierno nacional, y la efectiva sanción de una ley de financiamiento universitario (más allá de los vaivenes antes señalados). Este accionar podría, entonces, inscribirse dentro del conjunto de iniciativas colectivas que apuntan a la revitalización o resguardo de la democracia.

Es válido aclarar que se trabaja con un enfoque analítico que considera la protesta social como categoría central, mientras su visibilidad pública, la conformación de alianzas y la incidencia política constituyen sus dimensiones de abordaje. En este sentido, ellas permiten examinar, por un lado, los repertorios de protesta desplegados, como los procesos de articulación y reconfiguración de vínculos entre actores sociales diversos y, por otro, la posibilidad de encontrar satisfacción o no a sus demandas considerando los logros obtenidos. En esta senda, nos valdremos de la revisión de bibliografía sobre la temática (sistematizada en proyectos de investigación previos), relevamiento de noticias en periódicos nacionales referidas a estas protestas, decretos y comunicados oficiales del gobierno, declaraciones e informes emitidos por sindicatos y agrupaciones estudiantiles universitarias, entre otros.

Finalmente, el escrito se desarrolla en tres apartados. En el primero de ellos, se comparten algunas consideraciones de orden teórico-conceptual en torno a las protestas y sus dimensiones en el marco de la democracia; en segunda instancia, se exhiben los materiales y métodos utilizados; y, en tercer lugar, se detallan los principales resultados obtenidos con el foco en las tres marchas federales universitarias. Las conclusiones remarcan los puntos centrales y vislumbran nuevas líneas de indagación.

La protesta social: entre su visibilidad, las alianzas y la incidencia política en la puja/disputa democrática

Frente a la vasta bibliografía existente sobre el tema, tanto en el orden global como latinoamericano, creemos preciso afirmar que entendemos a la «protesta social» como una «forma de acción colectiva situada, de carácter contencioso, deliberado, con visibilidad pública, protagonizada por actores sociales con demandas específicas que expresan un malestar

o descontento y se dirige, directa o indirectamente, al Estado en sus diferentes niveles» (Basconzuelo y Quiroga, 2024, p. 20). Además, exhibe como rasgo distintivo su naturaleza controversial-conflictiva (Auyero, 2002; Svampa, 2008; Calderón Gutiérrez, 2012; Snow, 2023; Rossi, 2023). Tal es así, que las protestas irrumpen en el espacio público con acciones directas para expresar un descontento o malestar (Schuster, 2005). Otra característica es importante resaltar: los repertorios de la protesta han introducido nuevas modalidades de participación que redefinen los alcances y sentidos de la movilización en contextos democráticos contemporáneos, pues combinan acciones presenciales con dinámicas de movilización en entornos digitales, en estrecha relación con el desarrollo y la expansión de las redes sociales. Se trata de protestas híbridas que potencian la capacidad de interpelación pública de los actores movilizados y favorecen la articulación de redes de apoyo más amplias y heterogéneas, que trascienden los límites espaciales y temporales de la protesta tradicional (von Bülow *et al.*, 2024).

La construcción de alianzas constituye un elemento central en el desarrollo y la proyección de las protestas colectivas, en tanto habilita la ampliación de las bases sociales de la movilización y la resignificación de las demandas más allá de los límites del colectivo inicialmente involucrado. En esta línea, Giarracca y Mariotti (2012) sostienen que los conflictos —socioterritoriales en los casos que estudian— suelen dar lugar a procesos de articulación entre diversos actores, en los que adquieren relevancia las «alianzas». Estas pueden entenderse como relaciones de cooperación entre actores heterogéneos que se organizan para coordinar acciones de denuncia, protesta y solidaridad, al ampliar la capacidad de los movimientos para instalar sus demandas en el espacio público. No obstante, estas alianzas no son automáticas ni estables, sino que se construyen de manera estratégica y contingente (Giarracca y Mariotti, 2012).

Las alianzas involucran «aliados» o «terceros sujetos», quienes son —para las autoras— aquellos actores que, sin habitar necesariamente los territorios en disputa, se involucran en las luchas y apoyan a las poblaciones directamente afectadas. Entre ellos se encuentran organizaciones sociales, ONG, profesionales, investigadores, periodistas o militantes, quienes aportan recursos técnicos, visibilidad pública y vínculos políticos que fortalecen la capacidad de acción del movimiento. Aportan conocimiento técnico, asesoramiento legal, acceso a espacios institucionales y, de esta forma, contribuyen a fortalecer la capacidad de incidencia del colectivo protestatario.

En apoyo de esta línea de pensamiento, Dieter Rucht (2004) ha señalado el sentido estratégico que revisten las alianzas, ya que, en la instancia de interpelar a un oponente, la acción de ampliar los apoyos puede favorecerlos hasta obtener un «mayor impacto social» (p. 197). Aunque las alianzas suelen ser inestables y contingentes, el autor sostiene que cumplen un papel clave en la acción colectiva, al incidir en su visibilidad pública, su legitimidad, sus estrategias y su capacidad de producir cambios.

Otra dimensión a destacar en el análisis de la protesta social, que recuperamos en este escrito, remite a su «incidencia política». De manera general y amplia, la idea de que los actores colectivos pueden influir en algún área de la dinámica política recoge los argumentos pioneros en la literatura sociológica sobre los movimientos sociales, bajo el predominio de dos enfoques conocidos: el de la movilización de recursos (McCarthy y Zald, 1977) y el de las estructuras de oportunidades políticas (McAdam, 1982; Tarrow, 1994). Además, el término encuentra una aproximación con las nociones de *advocacy* o *policy influence* que han sido trabajadas principalmente por la escuela anglosajona, y se emplea para referir a los actores colectivos (sean movimientos sociales, ONG, redes de activistas e inclusive transnacionales) que desarrollan estrategias deliberadas de acción e interactúan con el Estado con el objetivo de influir en las políticas públicas. Entre otros autores, dos de los más influyentes en esa línea han sido Paul Sabatier (1988) y luego en coautoría con Hank Jenkins-Smith (1993), ya que demostraron cómo, a través de coaliciones y redes, los actores colectivos pueden intervenir en las distintas instancias de formulación de políticas públicas.

Ahora bien, de manera específica, el término «incidencia política» encuentra una referencia teórica en autores que se han abocado a la realidad latinoamericana. Al ocuparse de las ONG, Hernández de Toro (2010) aplica el término en un sentido más amplio, al referirse a la «incidencia social y política» para afirmar que:

es el conjunto de acciones que realizan las organizaciones para influir en actores, procesos y estructuras sociales y políticas con el fin de producir cambios en las políticas públicas, en las prácticas institucionales o en las estructuras que generan pobreza e injusticia (pp. 70-71).

Pirker (2012), por su parte, se refiere a «incidencia política» como «un proceso deliberado y sistemático que contempla la realización de un conjunto de acciones de la ciudadanía organizada dirigidas a influir en quienes toman decisiones sobre políticas» (p. 159). Para la autora, la

incidencia política es un proceso que puede incluir, entre otras variables, «interactuar con actores institucionales y tomadores de decisiones para promover cambios en políticas públicas» (p. 161), así como también puede derivar de «la articulación de distintos actores sociales que comparten objetivos comunes» (p. 162).

Autores argentinos también emplearon la noción de estudio. En su investigación sobre la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en las políticas públicas, Leiras (2007) establece que se trata de «intervenciones que cambian el contenido o alteran el curso de la política pública en algún sentido» (p. 59). Una de las áreas en que puede concretarse la incidencia es la *construcción de la agenda pública*, es decir, cuando las OSC «tienen algún impacto relevante», por ejemplo, pueden lograr la «inclusión de un tema en la agenda pública, o formulación de una ley» (p. 44), como también «persuadir a segmentos de la opinión pública y a los funcionarios públicos a adoptar cambios» (p. 46); «intervenir en las legislaturas», o bien «en los distintos niveles de gobierno (nacional o subnacional)» (p. 48).

Las últimas reflexiones de este apartado están dedicadas a la relación entre las protestas sociales, su incidencia y la resignificación democrática. En esta línea, se entiende la protesta social como condición mínima para el funcionamiento efectivo de la democracia, en tanto garantía del derecho a disentir, resistir y proponer alternativas (Calderón Gutiérrez, 2012; Tartakowsky y Filleule, 2015). Al respecto, diversas publicaciones recientes refuerzan el sentido democrático que los actores colectivos construyen y ponen en juego a través de sus protestas, al ampliar los márgenes de participación, visibilizar demandas sociales e incidir en la configuración de la agenda pública y en la orientación de las decisiones colectivas.

A nivel global, Chantal Mouffe (2021) destaca la potencialidad de los sujetos colectivos para poner de relieve múltiples puntos de antagonismo e involucrarse en la democratización de un número creciente de relaciones sociales. Por su parte, Donatella Della Porta (2023, p. 18) postula que «en tiempos de crisis económica, social y política, se necesita más y no menos participación ciudadana», y reconoce a los movimientos sociales como «promotores de innovaciones democráticas que pueden mejorar la participación y las cualidades deliberativas» (p. 19).

Pensando en la región latinoamericana, Álvaro García Linera (2024) reitera la potencia de los movimientos sociales para expandir pulsiones igualitarias y democratizadoras. De manera que las protestas sociales hacen parte de la lucha por una «democracia compuesta»; es decir, una forma de gobierno que «se nutra de la forma liberal, pero la amplíe

con base en múltiples procesos de democratización que anidan en la sociedad» (García Linera, 2024, p. 90).

En un trabajo colectivo, Natalucci *et al.* (2024, p. 15) advierten que el rumbo de la democracia en América del Sur permanece abierto a las disputas «de la calle», donde no solo se cuestiona al orden instituido, también se anticipa «cómo las personas quisieran moldear el orden social». En una línea de argumentación similar, Solís Gadea *et al.* (2024) afirman que la mentada crisis de las democracias latinoamericanas contemporáneas no implica un diagnóstico cerrado y pesimista, sino la posibilidad de disputa y transformación, por lo que es decisiva la participación y organización colectiva.

En lo que concierne particularmente a las protestas universitarias en la Argentina, como también en América Latina, estas han ocupado un lugar central en la configuración de la vida política y democrática, que se constituyen en espacios privilegiados de politización, producción de demandas colectivas, intervención de terceros actores y articulación con conflictos sociales más amplios (Buchbinder, 2005; Buchbinder y Marquina, 2008; Dip y Jung, 2020; Luchilo, 2022; Basconzuelo, 2024), y permiten así comprender mejor la dinámica multifacética de las luchas universitarias a través de los estudios de caso. Al respecto, la relevancia principal del presente artículo radica en mostrar cómo las protestas del sector y, más allá de los casos emblemáticos, se desplegaron a escala nacional para lograr fundamentalmente la sanción de la mencionada Ley 27.795.

A continuación, se explicita la metodología adoptada para el estudio de las protestas universitarias recientes y, luego, el texto se exploya sobre su devenir en el marco de la disputa democrática, enfatizando la potencialidad de las marchas federales para ganar visibilidad, reconfigurar alianzas e incidir en la agenda pública de las políticas de financiamiento universitario.

Abordaje metodológico y fuentes de la investigación

El abordaje metodológico de la investigación responde a una perspectiva cualitativa a partir de un diseño flexible (Maxwell, 2019) y desde un enfoque de investigación documental (Valles, 1999). El carácter flexible del diseño ha permitido mantener la naturaleza articuladora de sus diferentes componentes a lo largo de todo el proceso de investigación; en especial, entre el problema de investigación, los objetivos, las dimensiones de la protesta, la selección del corpus documental y su análisis. Por su parte, la investigación documental nos ubica en un procedimiento metodológico particular para analizar el objeto de estudio: la utilización

de fuentes primarias y secundarias de manera simultánea para la construcción del dato⁴.

Por otra parte, el objeto de estudio fueron las marchas federales, las cuales fueron elegidas por su amplia capacidad de convocatoria, ya que lograron articular la iniciativa de diferentes claustros universitarios: trabajadores docentes y no docentes, estudiantes, graduados y autoridades. También tejieron alianzas con otras organizaciones gremiales y sociales, y con actores políticos relevantes como gobernadores y parlamentarios. Además, por su sostenibilidad en el tiempo. La trayectoria de las protestas abarcó desde la primera gran marcha federal en abril de 2024 hasta la tercera marcha federal en septiembre de 2025 y, en el medio, la recurrencia a otros repertorios y estrategias: huelga, clases públicas, presentación de proyectos de ley, petitorios, reuniones con parlamentarios. También se consideró su expansión y difusión territorial. Esta cuestión se plasmó en el carácter federal de las movilizaciones y en las amplias repercusiones en el entorno virtual. Por último, su carácter performativo, con impactos en la agenda pública y político-institucional.

Un aspecto relevante del proceso metodológico se constituye en la decisión de operativizar el concepto nodal de la investigación con su abordaje empírico. Para ello, se construyeron tres dimensiones de análisis de la protesta: la visibilidad pública, la conformación de alianzas e incidencia política. A su vez, su indagación empírica, requirió recurrir a referentes conceptuales y teóricos para contribuir a la selección del material específico que conforma el corpus de la investigación. De ese modo, la primera dimensión de análisis se relevó a partir de la modalidad organizativa y la capacidad de convocatoria que adquirieron las marchas federales, a través de documentos oficiales y registros de prensa; en la segunda, se prestó atención a los actores convocantes y adherentes, como a las frases y enunciados de los manifestantes sobre la conformación de alianzas vertidos en la prensa; y, finalmente, la incidencia política se observó en los discursos políticos enunciados con posterioridad de las manifestaciones por parte de los universitarios y los funcionarios públicos, además de las repercusiones que implicó la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario (figura 1).

Estas directrices contribuyeron a construir los criterios de selección de los documentos, entre los que destaca la polifonía de los actores discursivos, es decir, que se privilegió aquellos documentos que

4 Se entiende por fuente primaria aquella en la cual no hay intermediación entre el fenómeno que se estudia y el investigador. Por su parte, la fuente secundaria alude a la información que obtiene el investigador por medio de un intermediario.

atendieran a la diversidad de opiniones, ideologías y posiciones sociales de los protagonistas del conflicto. También se consideró la rigurosidad del contenido de las fuentes utilizadas, priorizando aquellas que ofrecieran una mirada escalar del conflicto tanto a niveles regionales como nacionales. El carácter público de la información fue el tercer criterio considerado para la selección de los documentos constitutivos del corpus para el análisis del tema.

Su aplicación permitió crear una base documental conformada por las siguientes fuentes. Las fuentes primarias de información están integradas por los comunicados oficiales del Gobierno Nacional sobre el conflicto universitario (decretos presidenciales emitidos en el Boletín Oficial de la República Argentina, comunicados oficiales del presidente, diarios de sesiones legislativas, etc.) y las declaraciones emitidas por organismos de representación de los universitarios (declaraciones emitidas por el Consejo Interuniversitario Nacional, el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina, entre otros)

Las fuentes secundarias consultadas fueron la diversidad de prensa gráfica existente de acuerdo a los criterios de selección indicados con anterioridad. Los periódicos *Clarín*, *La Nación* y *Página/12* se consultaron para reconstruir la crónica exhaustiva de las marchas federales. Cabe señalar que la revisión documental abarca los momentos previos y posteriores a cada marcha y para contextualizar cada protesta y su dinámica en el clima social de la época.

Ante el volumen de información recolectada se procedió a su triangulación (Valles, 1999) como técnica de análisis para construir los datos y con una doble finalidad. La primera fue identificar aquellos repertorios, discursos, enunciados y frases en las fuentes que emergen como similares o específicos en las tres marchas federales, para dar un tratamiento de los datos informativos a partir de su continuidad o discontinuidad discursiva e inferir los núcleos de contenido pragmático⁵ del discurso. La triangulación informativa, por otra parte, nos ayudó a lograr un tratamiento riguroso del dato a partir de su comparación y acercarnos a la reconstrucción de la protesta universitaria, sus características, visibilidad e incidencia política. Finalmente, se indica que en el análisis de los datos se respetaron las normas éticas que requiere todo proceso de investigación⁶.

5 El nivel pragmático del discurso hace referencia al estudio del contexto en que se produce el discurso más allá de su estructura gramatical.

6 En este sentido, se consideraron las pautas señaladas por el Código de Conducta para Editores de Revistas (COPE).

El Ciclo de la Protesta Social: Dimensiones de Abordaje

Este esquema analiza la protesta social como una categoría central dividida en tres dimensiones interconectadas, examinando desde las tácticas visibles hasta el impacto político.



FIGURA 1. Visualización del ciclo de la protesta social

Nota. Infografía generada con la herramienta de inteligencia artificial NotebookLM (Google, 2024) a partir de los datos del texto introductorio.

Resultados: las marchas federales como repertorio central

Desde el inicio de la gestión presidencial de Javier Milei (diciembre de 2023), se ha observado una postura confrontativa hacia las universidades públicas y el sistema científico-tecnológico, manifestada a través de medidas gubernamentales⁷ y reiteradas expresiones públicas de deslegitimación⁸.

En los primeros meses de 2024, las federaciones que nuclean a los trabajadores docentes y a los no docentes de las universidades públicas argentinas denunciaron particularmente el ahogo presupuestario y el deterioro salarial del sector. Impulsaron medidas de protesta (asambleas, huelgas y clases públicas), pero la situación escaló en resonancia y visibilidad al sumarse el accionar de las autoridades universitarias nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los estudiantes. Esta sumatoria de descontentos derivó en la convocatoria a grandes movilizaciones que se denominaron «marchas federales» para subrayar la participación a lo largo y ancho del país.

7 Según el nuevo organigrama gubernamental, el Ministerio de Educación perdió dicho rango para conformar una secretaría bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. A su vez, se disolvió el Ministerio de Ciencia y Técnica, lo que dio lugar a una secretaría dependiente de la Jefatura de Gabinete. La agencia estatal de financiamiento para investigación se reestructuró y está, de hecho, paralizada. Hubo oposición también a la apertura de nuevas casas de altos estudios.

8 Por ejemplo, las expresiones vertidas por Milei un mes antes de desatarse el conflicto, al decir que las universidades «lavan cerebros» (*Clarín*, 26/3/2024), y también después, al decir que son «espacios de curros» que «resisten las auditorías» (*La Nación*, 10/10/2024).

Esas marchas federales constituyeron el repertorio central de la protesta universitaria acontecida en el ciclo 2024-2025, y adquirieron amplia capacidad de convocatoria, visibilidad, expansión territorial e incidencia política. A continuación, analizaremos estas marchas con mayor detenimiento.

Primera marcha federal universitaria: 23 de abril de 2024

En cuanto a la primera dimensión propuesta para análisis, visibilidad pública, cabe reconocer que la primera marcha destacó por su amplia capacidad de visibilización y convocatoria. Bajo la consigna «En defensa de la universidad pública», la protesta alcanzó un carácter federal y multisectorial (*La Nación*, 24/4/2024). Con un epicentro masivo en la ciudad de Buenos Aires, la movilización se replicó en las principales capitales provinciales y ciudades, hasta alcanzar una cifra estimada de un millón de manifestantes en todo el país (*Página/12*, 24/4/2024).

El eje central de las demandas fue el desfinanciamiento del sistema universitario, un reclamo que se originó tras la decisión del Poder Ejecutivo de prorrogar el presupuesto de 2023 para el ejercicio del año siguiente, en un contexto de alta inflación. Esta medida implicó, en términos reales, una licuación drástica de los recursos operativos de las instituciones. Precisamente, en el documento elaborado por los organizadores sindicales de la marcha, titulado «La universidad pública: base de la democracia y el desarrollo social», los actores académicos denunciaron la imposibilidad de garantizar el funcionamiento básico (luz, gas, insumos de limpieza), la caída del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes, así como el riesgo inminente sobre las actividades de investigación y extensión. La universidad pública fue presentada, en este sentido, como un pilar fundamental para la producción de conocimiento, la formación de profesionales y la movilidad social. El destinatario principal de estos reclamos era el gobierno nacional, al que se acusó de impulsar «un plan sistemático de desprestigio desplegado para el desmantelamiento de estas instituciones, del mismo modo que han operado y operan contra el sector público, estigmatizando a los trabajadores». Asimismo, la protesta incorporó una dimensión simbólica relevante, al reivindicar la educación superior como «un bien público social, un derecho humano fundamental y universal y un deber indelegable del Estado» (CIN, 15/5/2024).

En cuanto a la visibilización cabe también advertir que las demandas expresadas en la marcha buscaban afianzarse por los entornos digitales. Las estrategias online no solo hacían extensiva la convocatoria a la movilización, sino que, de modo creativo, aportaban información relevante sobre el estado de situación. Por ejemplo, la Universidad de

Buenos Aires (UBA) difundió por redes sociales algunos videos que, a través de una breve ficción, mostraban las vicisitudes de los docentes en el desempeño de otras tareas. En uno de estos videos se puede ver a un mozo explicándole la «ley de la palanca» de Arquímedes a un comensal, antes de abrir una cerveza; y, en otro, a una psicóloga que trabaja en un call center y aprovecha la conversación sobre reclamos de los usuarios para desarrollar conceptos de psicoanálisis, como si estuviera dando clase. Estos reels recibieron multitud de comentarios y réplicas, y marcaron la importancia de que cada trabajador pueda desempeñarse y reconocerse en la actividad para la que se ha formado⁹.

La dimensión que remite a la construcción de alianzas revela un rasgo distintivo de esta protesta, ya que su composición fue heterogénea y basada sobre vínculos amplios y transversales. El frente universitario se consolidó a través de la alianza entre autoridades, como el CIN, los estudiantes representados por la Federación Universitaria Argentina (FUA)¹⁰ y los sindicatos del sector: Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), Federación Nacional de Docentes, Investigadores/as y Creadores/as Universitarios (CONADU Histórica), Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Frente de Asociaciones de Base (FAB), Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN). A este núcleo se sumaron las centrales obreras (CGT y ambas CTA), cuyos dirigentes expresaron «la educación pública es un bien que el pueblo no está dispuesto a entregar» (*Página/12*, 24/4/2024). A su vez, se hicieron presentes en las marchas dirigentes de sectores políticos opositores (peronistas, radicales, de la izquierda), gobernadores y legisladores en las provincias. La articulación sumó a investigadores del CONICET y a referentes históricos de los organismos de derechos humanos. Por último, periodistas y personalidades de la cultura amplificaron el reclamo en redes sociales, lo que también contribuyó a su masividad. En otras palabras, se configuró como «un hito de resistencia frente al gobierno» (*Página/12*, 24/4/2024). Esta coalición de apoyo dotó al reclamo de una legitimidad política que obligó al Gobierno a trasladar la discusión al ámbito legislativo.

9 Disponibles en: <https://www.youtube.com/watch?v=6x205KPlvws>

10 Cabe dimensionar la densidad histórica y el peso político de las luchas estudiantiles, que por su parte se han caracterizado históricamente por acompañar las principales reivindicaciones populares y actuar en consonancia con el movimiento obrero. Esta articulación encuentra sus hitos fundamentales en la Reforma Universitaria de 1918, la gratuidad de la enseñanza superior decretada en 1949, los levantamientos populares del Cordobazo y el Rosariazo en 1969, y la resistencia en los años noventa frente a los ajustes que el neoliberalismo hizo contra la educación pública.

Inicialmente, el presidente Javier Milei intentó desestimar la movilización, al tildarla de «marcha política» impulsada por la «vieja casta de siempre», a lo que añadió diversos descalificativos¹¹. Sin embargo, tres semanas después se tomó una medida que profundizó el conflicto: la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, dictó una resolución que beneficiaba exclusivamente a la Universidad de Buenos Aires (UBA), ya que el acuerdo fijaba un aumento interanual del 270 % sobre el presupuesto asignado en 2023 y un 300 % para sus hospitales universitarios (Boletín Oficial de la República Argentina, 15/5/2024). Esta decisión fue objetada de inmediato por el Comité Ejecutivo del CIN¹².

En el marco del análisis de la tercera dimensión propuesta, la incidencia política, se advierte que, en agosto de 2024, ingresaron dos proyectos sobre financiamiento universitario a la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Uno presentado por el principal partido opositor, Unión por la Patria, que no obtuvo respaldo; y otro, que sí prosperó, impulsado por un grupo de partidos opositores dialoguistas con el gobierno (Unión Cívica Radical, Coalición Cívica, Encuentro Federal e Innovación Federal). Así logró sanción la Ley 27.757¹³ de Financiamiento Universitario, con 160 votos a favor, 85 negativos y 5 abstenciones (Congreso de la Nación Argentina, Cámara de Diputados, 14/8/2024). Esta ley se constituyó como el principal logro del ciclo de protesta hasta aquí emprendido, que buscó garantizar la actualización de las partidas presupuestarias por inflación y la recomposición salarial del sector. No obstante, el Poder Ejecutivo respondió vetando la ley en su totalidad bajo el argumento de que su

11 El 23 de abril, desde su página de Instagram, publicó la foto de un león bebiendo una taza con la leyenda «Lágrimas de zurdos», y, seguidamente, en la descripción, añadió: «Día glorioso para el principio de revelación». Cerró con su clásica frase: «Quien quiera oír (ver) que oiga (vea)... Viva la Libertad, carajo» (<https://www.instagram.com/javiermilei/>).

12 La entidad representativa de los rectores universitarios emitió un comunicado en el cual quedaba explícita la confrontación entre gobierno y sistema universitario, al decir: «Resultado inadmisibles y provocador que se reconozca solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país» (CIN, 15/5/2024).

13 Dicha ley representaba un costo total equivalente al 0,14 % del PBI; esto es, aproximadamente \$ 740 000 millones. En este proyecto se establecía una distribución fija del presupuesto universitario, al asignar el 85 % a gastos salariales y el 15 % restante a gastos generales y de funcionamiento. Proponía una actualización del presupuesto basada en la inflación de 2023 y una indexación bimestral, además de una recomposición salarial para docentes y no docentes (Oficina de Presupuesto del Congreso, Expediente CD 14-24). Preveía también una ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles. Establecía una modificación del artículo 58 de la Ley de Educación Superior y dictaba la obligatoriedad de la Auditoría General de la Nación (AGN) de realizar auditorías en el Congreso nacional sobre las erogaciones de las universidades nacionales (*Clarín*, 15/8/2024). El proyecto pasó al Senado y allí obtuvo el voto favorable de 57 legisladores.

implementación pondría en riesgo la estabilidad fiscal del país (Decreto N.º 879/2024).

El conflicto alcanzó su punto de mayor tensión política cuando la Cámara de Diputados, en octubre de 2024, no logró reunir los dos tercios de los votos necesarios para rechazar el veto presidencial. A pesar de contar con una mayoría a favor de la ley, una alianza estratégica entre el partido de gobierno, el PRO y sectores «dialoguistas» permitió mantener la decisión del Ejecutivo (*Clarín*, 3/10/2024).

Este desenlace no cerró el conflicto, sino que inauguró una nueva etapa de acción colectiva. La persistencia de la crisis presupuestaria y la firmeza del gobierno en su política de ajuste anticipaban la continuidad en las protestas, al consolidar a la universidad pública como el principal escenario de disputa sobre el rol del Estado y el futuro del desarrollo nacional en la Argentina contemporánea.

Segunda marcha federal universitaria: 2 de octubre de 2024

El efecto político y social que tuvo la observancia y posterior veto a la Ley de Financiamiento Universitario por parte del presidente Milei, como la imposibilidad de revertir la medida en la Cámara de Diputados, generó las condiciones para la realización de una segunda marcha federal universitaria, realizada el 2 de octubre de 2024. Si consideramos la primera dimensión de análisis, es válido subrayar que esta marcha llegó a superar, según la prensa, la capacidad de convocatoria que la realizada en abril de ese año: se estimó que más de «un millón de personas» (*Página/12*, 3/10/2024) se movilizaron en el país. Se destacan como significativas las manifestaciones en las ciudades capitales de provincia, pero también en localidades intermedias y de importancia regional que son sede de universidades nacionales, lo cual denota la relevancia que la sociedad le otorgó al reclamo.

El epicentro de la movilización convocada por el FSU, el CIN y la FUA fue la sede del Congreso Nacional en la ciudad de Buenos Aires (se estima que asistieron 150 000 personas). La demanda prioritaria fue «visibilizar el rechazo a las medidas del Gobierno», que incluían el veto a la ley de financiamiento educativo aprobada por el Congreso y un recorte presupuestario. Además, los manifestantes también protestaron contra el cierre de «programas y becas que permitían a muchos estudiantes seguir en sus carreras» (*La Nación*, 2/10/2024). En la concentración se realizó la lectura de un documento consensuado por las organizaciones convocantes titulado «La universidad pública, base de la democracia y el desarrollo social, lucha por su supervivencia» (CIN, 2/10/2024), en el cual se destaca como relevante, más allá del reclamo puntual por la aplicación

efectiva de la Ley de Financiamiento Educativo y sus consecuencias, la importancia histórica que la educación superior pública ha tenido en Argentina como base de la democracia, como derecho constitucional y como medio de movilidad social. Se consolida, de este modo, un discurso social crítico iniciado en la anterior protesta sobre lo que se considera una obligación inherente del Estado y que la gestión gubernamental de Milei se negó a ejecutar.

Nuevamente, aunque no constituye nuestro objeto de indagación, cabe advertir que la amplia difusión en redes fue importante para la notoriedad de la marcha. Se acompañó con imágenes conmemorativas de la primera marcha, cuadros y gráficos informativos e ilustrativos sobre el deterioro del presupuesto y el salario, e incluso con algunos videos que mostraban la imposibilidad de la docencia universitaria para comprar y consumir con una tarjeta que dijera «vocación»: vocación es una cosa, trabajo justamente remunerado, otra¹⁴.

En relación con la dimensión referida a las alianzas, un aspecto a destacar de la movilización fue la heterogeneidad de actores sociales que participaron en la protesta. Además de quienes integran la comunidad universitaria (docentes, estudiantes, investigadores, administrativos), tuvieron una importante presencia los movimientos sociales, sindicatos y organismos de derechos humanos. Se movilaron, también, integrantes de las Confederaciones de Trabajadores (CGT, CTA) y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Se contó con el apoyo de actores individuales como graduados de las universidades nacionales e incluso de estudiantes de universidades de gestión privada (*La Nación*, 3/10/2024). También adhirieron otros organismos nacionales e internacionales (CIN, 2/10/2024).

Además de los mencionados actores colectivos que participaron en la marcha federal, la presencia de políticos en funciones y exfuncionarios de diferentes partidos opositores a La Libertad Avanza se constituye en un dato a mencionar. En efecto, la asistencia y el apoyo de líderes políticos de Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica (*Página/12*, 3/10/2024) evidencian la continuidad y construcción permanente de alianzas entre los organismos representativos de los universitarios y otros actores colectivos que participaron en la primera marcha federal.

14 Por ejemplo, el reel «vocación o salario»: <https://www.instagram.com/reels/DLVH-ScM0w3/>

En lo que concierne a la incidencia política de la protesta, podemos señalar que esta fue limitada a pesar de la legitimidad del reclamo social. El campo de disputa se concentró en el juego político que sostuvo el oficialismo y sus aliados contra los representantes de la oposición en el Congreso Nacional. El presidente Milei adoptó una postura de confrontación directa frente a la movilización, al combinar posteos descalificadores en redes sociales¹⁵ con un decreto oficial (879/2024) que estableció el veto total al Proyecto de Ley N.º 27.757 de Financiamiento Universitario (Boletín Oficial de la República Argentina, 2/10/2024)¹⁶.

A pesar de esa oposición, el 9 de octubre de 2024, la Cámara de Diputados respaldó el veto presidencial, lo que no solo dilató la iniciativa en elaborar una nueva propuesta de ley, sino que agudizó el clima de malestar universitario. Se reactivaron nuevas movilizaciones que se combinaron con otros repertorios de protestas como clases en espacios públicos y tomas de facultades en diferentes universidades.

Recién en agosto del 2025, se logró que el Congreso Nacional aprobara una versión revisada del proyecto de financiamiento universitario y recomposición salarial, promulgado con algunas modificaciones en relación con la ley original (por ejemplo, se especificaron las fuentes presupuestarias y se incluía la actualización bimestral de los salarios de acuerdo con el índice de precios del consumidor, que mide la inflación). Sin embargo, esta nueva iniciativa fue también vetada por el Poder Ejecutivo el 10 de septiembre de 2025, aduciendo que interfiere con la política fiscal del gobierno (Decreto 647/2025). El nuevo veto presidencial derivó en una tercera marcha federal por parte de la comunidad universitaria.

Tercera marcha federal universitaria: 17 de septiembre del 2025

El 17 de septiembre del 2025, el FSU, el CIN y la FUA convocaron a la tercera marcha federal universitaria bajo la consigna «en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario» (CIN, 11/9/2025), e hizo eco del lema que se venía sosteniendo desde agosto: «Si hay veto, hay marcha». La movilización tuvo su epicentro en el Congreso Nacional, con réplicas

15 En su cuenta de Instagram, el 2 de octubre, afirmó en un post: «La universidad pública no está en peligro. Lo que peligra es el botín que se reparten». A la vez, criticó la alianza de dirigentes opositores argumentando que se juntaron «con un montón de impresentables prostituyendo una causa noble». Finalizó con un mensaje directo a la ciudadanía: «No permitas que te usen políticamente los golpistas» (<https://www.instagram.com/p/DAo-wsWyEqV/?igsh=MTlrd3Zrdm1nZXdoag%3D%3D>).

16 La normativa sostuvo que el proyecto ponía en riesgo el equilibrio fiscal y las cuentas públicas, al incrementar los gastos destinados a los salarios y al funcionamiento de las universidades nacionales, sin especificar de dónde saldrían los fondos.

en distintas ciudades del país, en el día en que la Cámara de Diputados de la Nación trataba los vetos a las leyes de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario.

Al considerar la primera dimensión de análisis, se constata que esta marcha fue catalogada por la prensa nacional como «masiva y pacífica» (*Clarín*, 17/9/2025), capaz de congregarse a una «gigantesca multitud» (*Página/12*, 18/9/2025). Esta fuente destaca, por ejemplo, la notoria convocatoria de la Universidad Nacional del Nordeste (en sus dos sedes: Corrientes y Resistencia); las más de 100 000 personas que se movilizaron en torno a la Universidad Nacional de Córdoba (en la ciudad homónima); y el alto acatamiento en Neuquén y Río Negro nucleando a las universidades del Comahue y de Río Negro.

Las marchas en todo el país fueron acompañadas de carteles y pancartas, con consignas que llamaban a la defensa del sistema público universitario, con alusiones directas a los legisladores, o con menciones negativas sobre las acciones del gobierno de Milei (principalmente su veto). Un lema unificador se hacía visible en las diferentes protestas del país: «Nuestro futuro no se veta» (*Clarín*, 18/9/2025). A su vez, en las concentraciones se leyó un mismo documento conjunto, titulado «El sueño de un país, el grito de una nación», que también hacía eco de las consignas mencionadas, al justificar una tercera gran convocatoria para salir a las calles «frente a la falta de respuesta y sensibilidad, la negación al diálogo, la difamación y los agravios, y la profundización del ajuste y el desfinanciamiento». Por eso, se exigía al «gobierno del presidente Javier Milei que cese con el hostigamiento; y a nuestros legisladores, representantes del pueblo de la nación en el Congreso, que por favor no abandonen a la salud y a la universidad pública» (CIN, 17/9/2025).

Esta tercera marcha reiteró la defensa de la universidad como símbolo de la movilidad social ascendente y la igualdad de oportunidades:

Todas y todos somos la universidad pública argentina. Hijos e hijas de una patria que supo construir aquí lo que no se pudo en ninguna otra parte del mundo. Un instrumento de movilidad social ascendente extraordinario [...] Es la educación pública que iguala y nos hace libres (CIN, 17/9/2025).

Esta operación fue una constante transversal a las tres marchas, al articular la universidad pública argentina con la expansión de la democracia.

En lo que respecta a la construcción de alianzas, cabe destacar que, al igual que las anteriores, la tercera marcha fue protagonizada por docentes, no-docentes, estudiantes e investigadores, a los que se sumaron jubilados,

trabajadores del Garrahan, organizaciones de derechos humanos, diversos sindicatos que integran la CTA y la CGT, además de muchos autoconvocados (*Página/12*, 18/9/2025) y la presencia del «arco político opositor al gobierno» (*Clarín*, 18/9/2025).

A su vez, unos días previos a la marcha, los trabajadores del Hospital Pediátrico Garrahan se habían reunido con los representantes del CIN para confluir en una gran manifestación nacional buscando el rechazo al veto a las dos leyes mencionadas. A su vez, se acordó el accionar conjunto con los jubilados, quienes se movilizaban todos los días miércoles frente al Congreso en rechazo al ajuste del gobierno. Previamente, también se mantuvieron reuniones con parlamentarios, con el fin de conseguir en el recinto los dos tercios de votos necesarios para rechazar el veto presidencial.

En cuanto a la incidencia política, hay un efecto inmediato de la protesta que remite al efectivo rechazo al veto presidencial por parte de la Cámara de Diputados en esa misma jornada¹⁷ y por parte del Senado durante la sesión del 2 de octubre¹⁸. De esa manera, se aprueba la norma, junto a la de emergencia en salud pediátrica, las cuales deberían ser promulgadas por el Poder Ejecutivo. Esto representó un «triunfo gestado en las calles» (*Página/12*, 17/9/25) y un «revés» para el gobierno (*La Nación*, 18/9/2025). Así, la prensa destacó que el Poder Legislativo hizo una demostración de fuerza al revertir una decisión presidencial, y, a su vez, lo consiguió con el voto no solo de parlamentarios opositores, sino también con «oficialistas o aliados» que antes habían acompañado al gobierno de Javier Milei.

Si bien no es objetivo de este texto adentrarnos en la incidencia concreta de las marchas en redes sociales, es curioso constatar que la tercera marcha tuvo mucha menor resonancia en el entorno virtual en comparación con las instancias previas. El estudio de Monitor Digital registró 62 200 menciones vinculadas a la marcha: una caída del 80 % respecto de abril de 2024, cuando la causa universitaria había alcanzado impacto masivo (*Perfil*, 18/9/2025). Esta cuestión resulta de interés para profundizar nuestra indagación, en torno a los límites en el repertorio de acción y las dificultades para preservar su resonancia en un lapso de tiempo extendido. Inclusive, a diferencia de lo ocurrido en otras protestas,

17 El veto se rechazó con 174 votos afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones (*Página/12*, 17/9/2025).

18 El Senado rechazó el 2 de octubre de 2025 el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, con 58 votos a favor de la insistencia, 7 en contra y 4 abstenciones (*Clarín*, 2/10/2025).

en esta oportunidad el presidente Milei prefirió mantener la cautela en la red social X y no publicó ningún comentario respecto de la marcha.

Conclusiones

En función de los objetivos de este artículo, podemos señalar algunos puntos transversales conforme nuestras dimensiones de análisis. En primer lugar, cabe destacar que las tres marchas se han erigido como repertorios clave de la protesta universitaria actual. Han constituido los eventos de mayor capacidad de convocatoria y visibilización, calificadas por la prensa como «masivas» en sus tres instancias. A su vez, destaca su carácter federal, que se desarrolla en varias ciudades a lo largo y ancho del país. Podría añadirse que se configuraron como manifestaciones híbridas, pues se hicieron visibles en los entornos virtuales, y no solo sirvieron para difundir la convocatoria, sino también para poner en circulación información ilustrativa sobre la crítica situación universitaria (gráficos, cuadros estadísticos, reels con pequeñas ficciones, intervenciones de apoyo de personalidades reconocidas, entre otras estrategias). Si bien no ha sido objeto específico de este artículo trazar un esquema de análisis/interrogantes sobre los contenidos volcados en redes sociales por parte de los actores convocantes a las marchas universitarias, hemos procurado subrayar la importancia de la combinación de formatos *online* y *offline*, cuyas especificidades e implicancias podrían profundizarse en futuros trabajos de investigación.

En segundo término, para lograr esta notoria visibilidad pública y la sostenida resonancia en la virtualidad, así como en los medios de comunicación, fueron relevantes las alianzas construidas entre diferentes actores universitarios y por fuera del campo académico. Los reclamos universitarios se enlazaron con los de otros sectores damnificados por el ajuste, como los jubilados, trabajadores en general, y particularmente aquellos vinculados a la salud. A su vez, es pertinente señalar que muchos legisladores se convirtieron en «aliados estratégicos» al trabajar en pos de la sanción del proyecto de ley de financiamiento universitario y, luego, para rechazar el veto presidencial. El ímpetu de los actores universitarios para fortalecer la vinculación con los parlamentarios contribuyó, además, a horadar los apoyos políticos que había construido el presidente Milei en el ámbito legislativo. En ese sentido, tal como mostramos antes, la votación del 17 de septiembre de 2025 contó con apoyos no solo de los opositores declarados del gobierno, sino también de aquellos sectores que, si bien no se enrolaban dentro de la Libertad Avanza (oficialismo), le otorgaban su reiterado respaldo en el recinto. En dicha ocasión, algunos legisladores del PRO, de la UCR e, incluso, ex libertarios que habían llegado

al Congreso de la mano de Milei, pero se diferenciaban de conducción, se desempeñaron como aliados del sector universitario.

En tercer lugar, cabe advertir que las marchas federales tuvieron una incidencia política concreta con la sanción de la ley en cuestión y el rechazo al veto presidencial, aunque aún no se haya logrado la efectiva implementación de la norma. En la disputa continúa predominando, pues, el criterio fiscal del Poder Ejecutivo, por lo que se relegan los múltiples argumentos sostenidos por los colectivos universitarios y sus aliados. El presupuesto anual 2026 incluyó montos mucho menores a los que demandaban las universidades y no aplicó la actualización progresiva prevista por la ley. A su vez, en febrero de 2026 el Gobierno envió al Congreso un proyecto¹⁹ que modifica la norma ya aprobada.

En cuarto lugar, las protestas universitarias permiten comprender que la democracia no se reduce a su dimensión procedimental o institucional, sino que se constituye como un proceso dinámico, conflictivo y en permanente construcción. En este sentido, la movilización estudiantil y de los trabajadores universitarios expresa demandas sectoriales y, además, amplía el espacio público al incorporar voces, diagnósticos y experiencias que tensionan los límites de la representación formal. Las marchas federales, en particular, contribuyeron a visibilizar problemáticas estructurales del sistema universitario argentino —como el ajuste presupuestario, el deterioro salarial y los intentos de deslegitimación pública—, al tiempo que pusieron de manifiesto un malestar social más amplio, vinculado con la concentración de poder y el aumento de la desigualdad. Sin embargo, su aporte a la democracia no se agota en la denuncia o la resistencia. Más allá de su carácter reactivo frente al ajuste, estas protestas no solo defienden la universidad pública, sino que actúan como prácticas democratizadoras en sí mismas, al ensanchar los márgenes de participación, deliberación y disputa por lo común.

Así, pues, la evidencia analizada permite constatar la hipótesis de trabajo planteada: la construcción de alianzas multiescales otorgó a las marchas federales de 2024-2025 una inédita capacidad de convocatoria e incidencia política. Esta articulación permitió ampliar y nacionalizar el debate sobre los recursos y los salarios de la educación superior, así como también reorganizó los apoyos en el Congreso y derivó en la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario. De este modo, aun frente a

19 La iniciativa contempla una recomposición salarial por las pérdidas registradas en 2025 —pero no en 2024— y prevé la actualización de los gastos de funcionamiento únicamente para 2026, sin hacer referencia a las pérdidas acumuladas durante 2024 y 2025 (*Clarín*, 19/2/2026).

la postergación en la ejecución de la norma y las constantes tensiones presupuestarias, las movilizaciones se consolidaron como repertorios de acción colectiva orientados a revitalizar la esfera pública y resguardar la institucionalidad democrática.

En los últimos días en que se escribía este artículo se proyectaba la cuarta marcha federal (probablemente para el 23/4/2026), al tiempo que se desarrollaban jornadas de paro universitario ante el incumplimiento gubernamental de la ley de financiamiento universitario. Entretanto, el Poder Judicial también entró en escena con un fallo del 31 de marzo de 2026, donde la Cámara Contencioso Administrativa Federal subrayó la obligación del Gobierno de cumplir la ley y actualizar salarios y becas en las universidades públicas.

En definitiva, cabe reconocer que no hablamos de un éxito rotundo, ni mucho menos de un problema saldado. Dado que aquí se analizan procesos en curso, resta continuar el análisis con el seguimiento de la evolución del conflicto en sus múltiples dimensiones —presupuestaria, institucional, política y social—, atendiendo tanto a la capacidad del colectivo universitario de sostener la movilización y ampliar sus alianzas, como a las respuestas del gobierno y del sistema político en su conjunto. Solo en esa dinámica será posible evaluar si estas acciones logran traducirse en transformaciones duraderas en las condiciones materiales de la universidad pública y, más ampliamente, en un fortalecimiento efectivo de las prácticas democráticas.

Contribución de autoría

María Virginia Quiroga participó en las fases de conceptualización, curación de datos, análisis de datos, redacción del borrador original, y redacción, revisión y edición del texto final.

Celia Cristina Bascozuelo participó en las fases de conceptualización, curación de datos, análisis de datos, y redacción, revisión y edición del texto final.

Iván Baggini participó en las funciones de metodología, validación, y redacción, revisión y edición del texto final.

Fuente de financiamiento

Esta investigación no posee financiamiento específico, en un contexto de fuertes restricciones presupuestarias a la investigación científica en la Argentina.

Potenciales conflictos de interés

Ninguno.

Declaración de uso de IA

En el desarrollo del manuscrito se utilizó inteligencia artificial generativa (IA-G). Su uso se limitó exclusivamente al apoyo en el armado del listado de referencias bibliográficas, en la traducción y en la confección de un gráfico que sistematiza las dimensiones de análisis. En ningún caso se empleó como fuente directa de información.

Agradecimientos

Agradecemos las atentas observaciones de los evaluadores, que contribuyeron a la claridad teórica y expositiva del escrito.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Auyero, J. (2002). *La protesta. Retratos de la beligerancia popular en la Argentina democrática*. Libros del Rojas.
- Avritzer, L., Peruzzotti, E. y Iazzetta, O. (Eds.). (2023). *La antipolítica y los desafíos de la democracia argentina*. Prometeo.
- Basconzuelo, C. (2024). La universidad pública contra el neoliberalismo noventista. Cuando los claustros articularon sus protestas. *Estudios*, 52, 53-82. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9729286>
- Basconzuelo, C. y Quiroga, V. (2024). *Las protestas sociales en la Argentina reciente*. Teseo.
- Buchbinder, P. (2005). *Historia de las universidades argentinas*. Sudamericana.
- Buchbinder, P. y Marquina, M. (2008). *Masividad, heterogeneidad y fragmentación. El sistema universitario argentino: 1983-2007*. Ediciones de la UNGS.
- Calderón Gutiérrez, F. (Coord.). (2012). *La protesta social en América Latina. Siglo XXI*.
- Carvalho, P., Natalucci, A. y Somma, N. (Coords.). (2024). *Protestas, democracia y desigualdades en el Cono Sur*. Prometeo.
- Della Porta, D. (2023). *Cómo los movimientos sociales pueden salvar la democracia*. Prometeo.
- Dip, N. y Jung, M. E. (2020). La universidad en disputa: Política, movimientos estudiantiles e intelectuales en la historia reciente latinoamericana. *Contemporánea*, 12(1), 9-15. <https://ojs.fhce.edu.uy/index.php/content/article/view/753>
- García Linera, A. (2024). *La democracia como agravio*. CLACSO.
- Giarracca, N. y Mariotti, D. (2012). «Porque juntos somos muchos más»: Los movimientos socioterritoriales de Argentina y sus aliados. *OSAL*, 13(32), 95-115.
- Grimson, A. (2024). *Desquiciados. Los vertiginosos cambios que impulsa la extrema derecha*. Siglo XXI.
- Hernández de Toro, J. (2010). Hacia un concepto de incidencia social y política como reto para las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo del siglo XXI. *Revista de Fomento Social*, 65, 57-86. <https://revistas.uloyola.es/rfs/article/view/1951>
- Leiras, M. (2007). La incidencia de las organizaciones de la sociedad civil en las políticas públicas. En C. Acuña y A. Vacchieri (comps.), *La incidencia política de la sociedad civil* (pp. 93-118). Siglo XXI.

- Luchilo, L. (2022). La evolución del sistema de educación superior argentino desde 1983: La dinámica de expansión y diversificación. En G. Gamallo (comps.), *De Alfonsín a Macri. Democracia y política social en Argentina (1983-2019)* (pp. 185-222). Eudeba.
- Maxwell, J. (2019). *Diseño de investigación cualitativa. Un enfoque interactivo*. Gedisa.
- McAdam, D. (1982). *Political process and the development of Black insurgency, 1930-1970*. University of Chicago Press.
- McCarthy, J. D. y Zald, M. N. (1977). Resource mobilization and social movements: A partial theory. *American Journal of Sociology*, 82(6), 1212-1241.
- Mouffe, C. (2021). *Agonística. Pensar el mundo políticamente*. Fondo de Cultura Económica.
- Natalucci, A., Tatagiba, L. y Somma, N. (2024). Las protestas y desafíos actuales a la democracia en América Latina. En P. Carvalho, A. Natalucci y N. Somma (eds.), *Protestas, democracia y desigualdades en el Cono Sur* (pp. 13-36). Prometeo. https://www.jstor.org/content/oa_chapter_edited/jj.43178327.4
- Pirker, K. (2012). Investigación aplicada e incidencia política: Reflexiones en torno a una estrategia de participación ciudadana. En C. Lachenal y K. Pirker (coords.), *Movimientos sociales, derechos y nuevas ciudadanías en América Latina* (pp. 153-188). Fundar y Gedisa.
- Rinesi, E. (2023). *Democracia. Las ideas de una época*. Imprenta del Congreso de la Nación.
- Rossi, F. (Ed.). (2023). *The Oxford handbook of Latin American social movements*. Oxford University Press.
- Rucht, D. (2004). Movement allies, adversaries, and third parties. En D. A. Snow, S. A. Soule y H. Kriesi (eds.), *The Blackwell companion to social movements* (pp. 197-216). Blackwell.
- Sabatier, P. (1988). An advocacy coalition framework of policy change and the role of policy-oriented learning therein. *Policy Sciences*, 21(2-3), 129-168. <https://link.springer.com/article/10.1007/BF00136406>
- Sabatier, P. y Jenkins-Smith, H. (Eds.). (1993). *Policy change and learning. An advocacy coalition approach*. Westview Press.
- Schuster, F. (2005). Las protestas sociales y el estudio de la acción colectiva. En F. Schuster, F. Naishtat, G. Nardacchione y S. Pereyra (eds.), *Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea* (pp. 43-83). Universidad de Buenos Aires.
- Snow, D. A. (Ed.). (2023). *The Wiley Blackwell companion to social movements*. (2.ª ed.). John Wiley & Sons.

Solís Gadea, H. R., Amezcua Yépiz, M. y Casc, J. M. (Coords.). (2024). *Democracias en disputa. Diagnósticos, narrativas y resistencias en América Latina*. CLACSO y CALAS.

Svampa, M. (2008). *Movimientos sociales, nuevas ciudadanías y cambio de época en América Latina*. Siglo XXI.

Tarrow, S. (1994). *Power in movement. Social movements, collective action and politics*. Cambridge University Press.

Tartakowsky, D. y Fillieule, O. (2015). *La manifestación. Cuando la acción colectiva toma las calles*. Siglo XXI.

Valles, M. (1999). *Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional*. Síntesis.

Von Bülow, M., Messori, F. y Olguín, T. (2024). Protestas híbridas: redes y repertorios en las calles y en las arenas digitales. En P. Carvalho, A. Natalucci y N. Somma (eds.), *Protestas, democracia y desigualdades en el Cono Sur* (pp. 177-198). Prometeo. https://www.jstor.org/content/oa_chapter_edited/jj.43178327.9?seq=1

Wegelin, L. (2024). Radicalización autoritaria en la Argentina contemporánea: Sobre los imaginarios de la política en la crisis neoliberal. En A. Tzeiman y D. E. Martuscelli (coords.), *La crisis de la democracia en América Latina* (pp. 305-332). CLACSO.

Fuentes

Documentos oficiales:

Boletín Oficial de la República Argentina. (15 de mayo de 2024). Resolución de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano. RSE EX2024-37240423. <https://www.lettrap.com.ar/politica/el-gobierno-cedio-y-le-dara-los-fondos-la-uba-que-suspendio-la-emergencia-presupuestaria-n5408563>

Boletín Oficial de la República Argentina. (2 de octubre de 2024). Decreto 879/2024: Obsérvase en su totalidad el proyecto de ley N.º 27.757. <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/315058/20241003>

Boletín Oficial de la República Argentina. (10 de septiembre de 2025). Decreto 647/2025. <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/5932589/20250910?suplemento=1>

Centro de Investigación para la Calidad Democrática. (2025). Informe anual sobre calidad democrática en Argentina. https://www.eldiarioar.com/politica/democracia-argentina-vota-vez-desinteres-estructural_1_12296829.html

Confederación Nacional de Docentes Universitarios. (7 de mayo de 2025). Ciclo federal de foros de debate 2025. https://conadu.org.ar/wp-content/uploads/1_4956241776814851538.pdf

Consejo Interuniversitario Nacional. (17 de septiembre de 2025). El sueño de un país. El grito de una nación. <https://www.cin.edu.ar/el-sueno-de-un-pais-el-grito-de-una-nacion-gracias-argentina/>

Consejo Interuniversitario Nacional. (11 de septiembre de 2025). Se anuncia la tercera Marcha Federal Universitaria. <https://www.cin.edu.ar/se-anuncia-la-tercera-marcha-federal-universitaria/>

Consejo Interuniversitario Nacional. (10 de octubre de 2024) *La universidad pública, base de la democracia y el desarrollo social, lucha por su supervivencia*. <https://www.cin.edu.ar/la-universidad-publica-base-de-la-democracia-y-el-desarrollo-social-lucha-por-su-supervivencia/>

Consejo Interuniversitario Nacional. (24 de mayo de 2024). Comunicado del Comité Ejecutivo del CIN. <https://www.cin.edu.ar/comunicado-del-comite-ejecutivo-del-cin-2/>

Corporación Latinobarómetro. (2024). Informe Latinobarómetro 2024. <https://www.latinobarometro.org>

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2025). Indicadores de desarrollo social y económico. <https://www.indec.gob.ar>

Oficina de Presupuesto del Congreso. (2024). Impacto de proyectos de ley y revisión de financiamiento de universidades nacionales: Expediente CD 14-24. <https://opc.gob.ar/impacto-proyectos-de-ley/impacto-fiscal-del-proyecto-de-ley-en-revision-de-financiamiento-de-universidades-nacionales-expediente-cd-14-24/>

Primera Marcha Federal Universitaria. (23 de abril de 2024). Declaración conjunta de CIN, Frente Sindical y FUA. <https://www.cin.edu.ar/la-universidad-publica-base-de-la-democracia-y-el-desarrollo-social/>

Universidad Católica Argentina. (25 de septiembre de 2025). Comunicado: Un descenso sobrerrepresentado de la pobreza en la Argentina. <https://uca.edu.ar/es/noticias/comunicado-un-descenso-sobrerrepresentado-de-la-pobreza-en-argentina>

Periódicos:

Clarín (26/3/2024, 15/8/2024, 30/10/2024, 17/9/2025, 18/9/2025, 2/10/2025, 19/2/2026)

La Nación (24/4/2024, 2/10/2024, 3/10/2024, 10/10/2024, 18/9/2025)

Página/12 (23/4/2024, 24/4/2024, 3/10/24, 10/12/2025, 17/9/2025, 18/9/2025).

Perfil (18/9/2025).

Red social:

<https://www.instagram.com/javiermilei/>

<https://www.instagram.com/reels/DLVH-ScM0w3/>

María Virginia Quiroga es profesora e investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas, dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y la Universidad Nacional de Río Cuarto (Argentina) y la Universidad Católica de Córdoba (Río Cuarto, Argentina).

Celia Cristina Basconzuelo es profesora e investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas, dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y la Universidad Nacional de Río Cuarto (Argentina).

Iván Gustavo Baggini es profesor e investigador de la Universidad Nacional de Río Cuarto (Argentina) y la Universidad Católica de Córdoba (Río Cuarto, Argentina).

Recepción: 13/4/2026

Aceptación: 26/8/2026